

el mismo salario que sus contrapartes no productivas, siendo la antigüedad en el rango la única condición para aumentos de salario anuales.

Para premiar el mérito, los mandarines universitarios necesitan idear aumentos salariales anuales en función del rendimiento, ponderado de acuerdo a la docencia, beca y compromiso comunitario según las misiones institucionales. Tal sistema también hará posible que administradores y personal universitario identifiquen los objetivos organizacionales que son dignos de gratificación económica, reforzando así los valores institucionales. Además, el pago por mérito modera las restricciones presupuestarias institucionales al limitar la cantidad de fondos destinados a los aumentos salariales generales.

EQUIDAD EN EL MERCADO

Puesto que las universidades de Kenia obtienen ingresos adicionales del mercado, es realista que los salarios reflejen las realidades del mercado. Bajo los Acuerdos de Negociación Colectiva, todos los catedráticos y profesores del mismo rango tienen salarios similares sin importar su afiliación disciplinaria. Los profesores y catedráticos de medicina son más caros de entrenar, reclutar, retener y generan más becas de investigación a las universidades que sus contrapartes en las humanidades y ciencias sociales. De esta forma, ¿por qué su sueldo base debería ser comparable? Al infundir una diferenciación disciplinaria basada en el mercado al sueldo base de académicos universitarios, las universidades keniatas asegurarán que la retención del profesorado sea factible en disciplinas con alta demanda en el mercado.

El descontento por los salarios universitarios proviene de un triunvirato de tres factores interrelacionados: ajustes salariales por costo de vida iniciados por sindicato, remuneración por mérito y equidad.

La misma política de pago diferenciado, basada en el contexto institucional, debería aplicarse a los ejecutivos universitarios. Durante los recientes altercados laborales, se reportó que los vicerrectores se habían asignado a sí mismos un aumento salarial del 100 por ciento de forma ilegal. ¿Por qué deberían los vicerrectores de

instituciones nuevas, como Karatina, Kissi y Chuka, con una población de estudiantes apenas cruzando la marca de los 2000 tener el mismo pago que los líderes en universidades urbanas complejas como Kenyatta y Nairobi con poblaciones estudiantiles de 60.000 y 54.000 respectivamente? La destreza y energía mental que se requieren para operar el último caso superan por lejos al primero. La orientación en política de la Comisión en Educación Universitaria y la oficina de educación estatal sobre la remuneración vicerrectora será invaluable en este sentido.

En total, un alto el fuego permanente no será posible sin la democratización de la elaboración presupuestaria en las universidades estatales. Las acusaciones de los sindicatos sobre los altos niveles de corrupción en las universidades junto a los paros estudiantiles por los aumentos en los costos demuestran lo poco claro que se han vuelto los presupuestos universitarios. Si las universidades pueden divulgar actividades triviales como eventos culturales, visitas de alto perfil y aperturas al público, éstas pueden al menos compartir información presupuestaria con sus electores como lo hacen los gobiernos nacionales y de condado. Podrían beneficiarse de la experiencia de las instituciones estadounidenses, donde los presupuestos se publican en línea y los presidentes de las universidades dan cuenta pública año a año para informar sobre la dirección de la universidad. Más aún, las propuestas para aumentar los costos deben ser discutidas exhaustivamente con los estudiantes antes de ser implementadas. ■

Ten cuidado con lo que deseas: La tarea pendiente de la privatización de la educación superior australiana

ANTHONY WELCH

Anthony Welch es profesor de educación en la Universidad de Sidney, Australia. Correo electrónico: Anthony.Welch@sydney.edu.au

La reciente auditoría sobre el gasto nacional del gobierno australiano, comisionada por el gobierno federal entrante como avance al presupuesto de mediados de mayo, abrió una “caja de Pandora” de propuestas, especialmente en lo que respecta a la educación superior. Ahora que el presupuesto federal ya ha sido proclamado, está claro qué tan bien estas ideas concuerdan con la visión del Ministro de Educación. Aunque no todas las ideas fueron consideradas, al menos tres requieren más atención: el fondo público de la educación superior, la privatización y la regulación.

El ministro Pyne, en un reciente discurso en Londres, se manifestó conmovido de que no estuviesen presentes más universidades australianas en las top 50 a nivel mundial, y se apoyó en este hecho para enfatizar que la educación superior de su país necesitaba un cambio. Este es el tipo de declaración que esperamos de los ministros de educación en cualquier lugar (el ministro de Malasia, junto a muchos otros, ha hecho similares observaciones en los últimos años). Pero en el caso de Pyne, la referencia al Ranking Mundial de las Universidades de la Revista Times, puede solo ser explicada como la expresión de un ministro que no está familiarizado con su cartera de proyectos o que quiere hacer ruido político. El Ranking de Universidades de la revista Times, naturalmente, da una importancia fundamental a la reputación más que al desempeño. El mucho más sólido y confiable Ranking Académico de Universidades del Mundo de la Universidad Jiao Tong de Shanghai (ARWU por sus siglas en inglés), muestra que, aunque Australia no está presente en los primeros 50 lugares en el año 2013, cinco universidades (Universidad de Melbourne, Universidad Nacional Australiana, Universidad de Queensland, Universidad de Australia del Oeste y Universidad de Sidney) se encuentran entre las top 100. Considerando el tamaño relativamente reducido del sistema ése es un resultado respetable: Canadá, en muchos aspectos comparable a Australia pero con un sistema considerablemente más grande, sólo tiene cuatro universidades en el top 100 del ranking ARWU.

¿UNA HARVARD AUSTRALIANA?

Sin embargo, tanto el ministro como el tesorero quieren obtener mejores resultados en el ranking. Entonces, ¿qué se necesitaría para llevar a al menos una de las universidades australianas a los escalones superiores de esta distinguida lista? La Universidad de Harvard, por ejemplo, siempre se encuentra en el primer lugar de los rankings mundiales, se deleita teniendo un fondo de dotación que alcanzó los US\$36 billones antes de la

reciente recesión y está en vías de llegar a esa cantidad nuevamente. Así, se necesitaría duplicar los activos de la magnate minera australiana más rica (Gina Rinehardt, cerca de \$18 billones) o tener seis del magnate más adinerado de los casinos (James Packer, \$6 billones) para que siquiera una universidad australiana pudiese competir en esas ligas. Pero quizás Australia no debiese contenerse. La Universidad de Harvard, sin lugar a dudas, es excepcionalmente rica, pero otras instituciones líderes no están tan lejos (el fondo de dotación de la Universidad de Yale está valorado en US\$22 billones y el de la Universidad de Princeton en US\$17 billones). En Australia, la campaña del 2013 de la Universidad de Sidney fue la mayor de Australia. Ésta sentó una meta de AU\$600 millones, pero no se compara con la meta de la Universidad de Pensilvania de US\$4.3 billones, la de Universidad de Columbia de US\$5 billones y la de Universidad Northwestern de US\$3.75 billones. Por lo tanto, si vamos a creer que la afirmación del ministro Pyne sobre su deseo de ver a varias universidades australianas en el top 50 era sincera, entonces debiese haber recomendado un vasto aumento en el financiamiento federal a la educación superior en el reciente presupuesto.

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Lamentablemente, ocurrió todo lo contrario: la carga económica ha aumentado cada vez más para los estudiantes. Parte del financiamiento del gobierno está programado para decaer un 20 por ciento, por lo que los estudiantes terminarán pagando considerablemente más en cuotas y aranceles. Esto ocurrirá a pesar del hecho de que los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que la educación superior australiana ya tiene una baja calificación en términos de aporte público a la educación superior en relación a otros países. Los estudiantes australianos ya cargan con un porcentaje mayor de los costos de su educación universitaria que la mayoría de los países de la OCDE, y las propuestas actuales de eliminar el actual límite de las cuotas y aranceles agravarían la situación. Aún peor, el financiamiento por estudiante ha ido disminuyendo en el último tiempo. Este hecho ocurrió de manera más notable durante el período en que John Howard fue primer ministro australiano (1996-2006), tiempo en el cual el financiamiento disminuyó un 4 por ciento, en contraste con el alza promedio de la OCDE de un 49 por ciento. Los estudiantes actualmente contribuyen con el 41 por ciento de los costos de sus estudios; la Comisión de Auditoría propuso aumentar esta proporción al 55 por ciento. Además, la propuesta de reducir el

límite para la devolución de los préstamos estudiantiles, significaría que los estudiantes tendrían que comenzar a hacer los pagos mucho antes reduciendo considerablemente sus ingresos a lo largo de la vida (dado que los pagos serían ajustados al costo total del préstamo y no al índice de precios al consumidor actual).

La propuesta de no poner un tope a las tarifas ha probado ser divisiva en al menos dos aspectos. Los vice cancilleres del Grupo de las 8 universidades de excelencia australianas (Go8), que son las que más tienen que ganar, han tenido la tendencia a apoyar el levantamiento de la tarifa actual. Aunque ellas también perderían financiamiento del gobierno (se ha estimado que su Facultad de Artes y Ciencias Sociales perdería \$10 millones anuales, mientras que los fondos públicos para las carreras de Ingeniería, Ciencias Medioambientales Comunicaciones y Ciencias se reducirían a \$5,000 por estudiante). Otros vice cancilleres, que tienen menos que ganar y se preocupan más por la igualdad, han sido más críticos, argumentando que si las tarifas suben los estudiantes más pobres preferirán no estudiar, especialmente las carreras que tienen un costo mayor. Greg Craven, por ejemplo, vice canciller de la Universidad Católica Australiana, advirtió sobre la posibilidad de que se generaran divisiones: “nadie quiere tener un Rolls Royce y doce Comodores destartalados.” La propuesta también enfrenta a estudiantes que están comprensiblemente reacios a pagar costos más altos por su educación universitaria, contra al menos ocho (las del Grupo de las Ocho) universidades.

El ministro Pyne, en un reciente discurso en Londres, se manifestó conmovido de que no estuviesen presentes más universidades australianas en las top 50 a nivel mundial, y se apoyó en este hecho para enfatizar que la educación superior necesita un cambio.

FINANCIANDO EL SECTOR PRIVADO

Una segunda reforma clave en la plataforma, sería ver que el financiamiento del gobierno se abriera al sector privado, lo cual sería un gran cambio en un sistema que ha sido principalmente público. En una época en que,

como parte de una campaña global de austeridad, el actual gobierno nacional está proponiendo deshacerse de miles de funcionarios federales públicos, esto pareciera contradecir la actual retórica sobre preservar la calidad. En particular, un gran número de proveedores probablemente superaría la capacidad de la actual agencia nacional encargada de regular el sector (la Agencia de Estándares y Calidad de Educación Superior—TEQSA por sus siglas en inglés). Aquí, la reciente historia australiana de abrir la educación vocacional y formación profesional a proveedores privados es instructiva. En esa instancia, los reguladores del gobierno estatal estaban agobiados por un dramático aumento en el número de proveedores (algunos de los cuales eran genuinos y otros estaban mucho más preocupados de generar ganancias que proveer programas educacionales de calidad, infraestructura o personal). Como resultado, los reguladores en muchos estados no podían mantener la calidad en todo el sector, obteniendo resultados catastróficos. Aparecieron titulares sobre proveedores deshonestos y estudiantes extranjeros (particularmente de India) que eran engañados por las mismas instituciones, o embaucados por agentes inescrupulosos. Cuando la prensa en India se enteró de tales incidentes, historias sensacionalistas de estudiantes indios siendo abandonados, engañados o atacados se esparcieron rápidamente gracias a los periódicos y otros medios de comunicación. El número de estudiantes provenientes del subcontinente se desplomó, y la reputación de todo el sector educacional se vio afectado. Los recortes prometidos del 50 por ciento al financiamiento TEQSA van en contra de tales precedentes y aumenta el prospecto de un resultado similar en la educación superior.

Si todas las implicancias de qué tan lejos y qué tan rápido el nuevo gobierno federal desea desregular y privatizar la educación superior no están aún claras, hay signos preocupantes de que la ideología ha triunfado por sobre el análisis político. Si es así, existen riesgos reales para la educación superior que podrían poner en peligro el número de estudiantes extranjeros inscritos en la educación superior. Ten cuidado con lo que deseas. ■